



AMPARO EN REVISION 211/96.
QUEJOSO: MICROELECTRONICA,
S. A.

PONENTE: *MINISTRO JOSE DE JESUS GUDINO PELAYO.*
SECRETARIO: *LIC. ALFREDO LOPEZ CRUZ.*

Va. Bo.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y siete.

V I S T O S, para resolver el toca número 211/96, relativo al recurso de revisión interpuesto por Microelectrónica, sociedad anónima, por conducto de su representante legal Fernando Moreno Corzo, en contra de la sentencia autorizada el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Distrito Federal, en el toca DC-5947/95; y,

R E S U L T A N D O:


PRIMERO. Por escrito presentado el diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y cinco, en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Fernando Moreno Corzo, representante legal, de Microelectrónica, sociedad anónima, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se especifican:

AUTORIDAD RESPONSABLE:

"Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal."

ACTO RECLAMADO:

"La sentencia definitiva de veinticinco de agosto del año en curso, emitida por la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca 2063/95, pronunciada por el Juez Trigésimo Cuarto de Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal; la sentencia de veinticinco de agosto del año en curso, pronunciada en el toca 2064/95, por la propia Sala Tercera Civil; la sentencia de veinticinco de agosto del año en curso, pronunciada en el toca 2065/95, por la misma autoridad responsable, mismas que se acompañan como anexo en copia fotostática."



SEGUNDO.- La quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados; señaló como tercera perjudicada a Neftalí Frankel Spanglet y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 14 Y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO.- En relación con el planteamiento de inconstitucionalidad de la ley, la parte quejosa hizo valer los conceptos de violación que enseguida se transcriben:

"1. Se infringe en perjuicio de mi representada el artículo 14 constitucional que establece que a



ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, como se demostrará a continuación. - - - En el primer agravio expresado por mi representada en contra de la sentencia definitiva de dieciocho de abril del año en curso, pronunciada por el Juez Trigésimo Cuarto del Arrendamiento Inmobiliario exprese lo siguiente: - - - "1. Se infringe en perjuicio de mi representada el artículo 81 del Código de procedimientos Civiles que establece que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate", así como la ejecutoria que a continuación se transcribe: ARRENDAMIENTO CONTRATO CELEBRADO ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LAS REFORMAS EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO. (LEGISLACION PARA EL DISTRITO FEDERAL). Si un contrato de arrendamiento se celebró respecto a un departamento para habitación, el primero de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, esto es, antes de que entraran en vigor las reformas respectivas en materia de arrendamiento inmobiliario, es claro que independientemente de que su término feneciera, cuando dichas reformas ya estaban en vigor, la aplicación de las mismas, debe ser hecha hacia el futuro, o sea, aplicándolas a los contratos celebrados a partir de la entrada en vigor de las aludidas reformas publicadas el siete de febrero de mil novecientos ochenta y cinco, por lo que en cuanto a que debían aplicarse retroactivamente tales



CORTA DE
LA MON
Al De

reformas en su beneficio, debe expresarse que no se trata sólo de sus derechos, sino también de las de su contraria, porque ambos celebraron aquel contrato de arrendamiento.--- Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.--- Amparo Directo 1862/90. Agustín Mafiello Canales. 17 de Mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Martín Antonio Ríos. Secretario: Anastasio Martínez García.--- Sostienen la misma tesis: Amparo directo 982/90. Agustín Téllez Straffon. 18 de Junio de 1990. Mayoría de votos de José Joaquín Herrera Zamora y Martín Antonio Ríos. Desidente: Víctor Manuel Islas Domínguez. Ponente: José Joaquín Herrera Zamora. Secretario: Gonzalo Hernández Cervantes.--- Amparo directo 2332/90. Manuel Pardo García. 28 de junio de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Joaquín Herrera Zamora. Secretario: César Augusto Figueroa Soto.--- Semanario Judicial. Octava Epoca, Tomo VI. Julio-diciembre 1990. Segunda Parte. Tribunales Colegiados, página cuatrocientos cincuenta.--- En efecto, en mi escrito de contestación a la demanda, opuse en el inciso a) del capítulo de excepciones, la de improcedencia de la vía de controversias de arrendamiento, fundándome para ello en los puntos siguientes:- - - a). Que el contrato de arrendamiento fue firmado el primero de julio de mil novecientos ochenta y nueve.- - - b). Que en el Diario Oficial de la Federación de veintiuno de julio de mil novecientos noventa y tres se publicaron reformas al Código adjetivo civil entre ellas un título décimo sexto bis, denominado De las controversias en materia de arrendamiento inmobiliario.- - - c). Que en el Diario Oficial de

SUPLEN
JUSTICIA
SECRETARIA



- 5 -

A.D.R. 211/86.

la Federación de veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y tres, se publicaron reformas a los artículos transitorios del decreto que se menciona en el punto que antecede, estableciéndose en el segundo transitorio que las disposiciones de dicho decreto se aplicarían a partir del diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres, cuando se tratara de inmuebles que se encontraron arrendados al diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres, siempre que fueran para uso distinto del habitacional. - - - d). Que era ilegal y violatorio de la garantía de retroactividad de la ley la aplicación del procedimiento contenido en el título décimo sexto bis, del Decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiuno de julio de mil novecientos noventa y tres, para resolver la controversia planteada en el presente juicio, porque de acuerdo a la ejecutoria transcrita es improcedente aplicar reformas en materia de arrendamiento que no estaban en vigor en la fecha de firma del contrato porque esto implicará una aplicación retroactiva de la ley, ya que las leyes rigen hacia el futuro, y es improcedente aplicarlas a contratos firmados con antelación a su entrada en vigor. - - - Ahora bien, en la sentencia que se combate, en el considerando I el juez A quo determinó lo siguiente: - - - "La vía elegida fue la procedente con lo dispuesto por el título décimo sexto bis, del último ordenamiento legal citado". - - - Los argumentos anteriores contenidos en la sentencia recurrida son claramente violatorios en perjuicio de mi representada del artículo 81, del Código de Procedimientos Civiles que establece que las sentencias deben decidir todos los



LA CORTE DE
DE LA NECT N.
GENERAL DE JUICIOS.

puntos litigiosos, objeto del debate, ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones, toda vez que con la simple lectura del párrafo transcrito y de la totalidad de la sentencia que se combate se aprecia que el juez A quo se concretó a señalar que la vía elegida era la procedente, omitiendo analizar la totalidad de los argumentos expuestos por el suscrito en el inciso a) del capítulo de excepciones, incurriendo con ello en clara violación al artículo de referencia, porque siendo uno de los puntos litigiosos la procedencia de la vía, se omitió su análisis en la sentencia recurrida, ya que nada se dice al respecto que desvirtúe los argumentos expuestos en la excepción de mi representada, lo que se traduce en una sentencia incongruente que no resuelve los puntos planteados en la contestación a la demanda. - - - Aún en el supuesto sin conceder que el juez A quo hubiera efectuado el análisis de mi excepción, y determinado que era procedente la vía elegida por el actor, su sentencia carecería de la motivación exigida por el artículo 16 constitucional, toda vez que en ningún momento señala las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que lo llevaron a concluir que la vía escogida por el accionante era la correcta. - - - Independientemente de lo anterior, es notoriamente improcedente la vía escogida por el actor, que se contienen en el título décimo sexto bis, del decreto de reformas al Código de Procedimientos Civiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de mil novecientos noventa y tres. - - - En efecto, como se menciona en la ejecutoria transcrita, las disposiciones legales



SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARIA GENE



- 7 -

A.D.R. 211/96.

rigen hacia el futuro, de tal suerte que no pueden ser aplicables a contratos firmados con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor, por lo que en este caso si de acuerdo al decreto de veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y tres, las reformas al Código de Procedimientos Civiles que contienen la vía utilizada por el actor, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de veintiuno de julio de mil novecientos noventa y tres, entraron en vigor el diecinueve de octubre del mismo año, las mismas pueden ser aplicables a contratos firmados a partir de esa fecha, pero no así al contrato base de la acción que fue firmado el día primero de julio de mil novecientos ochenta y nueve, toda vez que esto implicaría una aplicación retroactiva de la ley prohibida por el artículo 16 constitucional. - - - De lo anterior, se concluye que si el contrato de arrendamiento se firmó el día primero de julio de mil novecientos ochenta y nueve y si las reformas que regulan la vía intentada entraron en vigor el diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres, es legal y lógico concluir que la determinación del juez A quo contenida en el considerando I, de la sentencia recurrida en la cual declaro procedente la vía elegida, es violatoria de la ejecutoria transcrita y del artículo 16 constitucional, porque implica una aplicación retroactiva de la ley que bajo ninguna circunstancia puede autorizar una autoridad judicial. - - - En consecuencia, es evidente que la falta de análisis de la excepción opuesta, sumada al hecho de la flagrante violación al artículo 14 constitucional, por declarar procedente la vía elegida por el actor, son notoriamente improcedentes



CORTE DE
LA NACIÓN
JEFES DE ACUERDO.

y conceden derecho a mi representada a la revocación de la sentencia recurrida y a que se dicte otra en la cual se ordene el desahogo del procedimiento vigente en la fecha de firma del contrato. - - - Al respecto, en la sentencia definitiva de veinticinco de agosto del año en curso, pronunciada en el toca 2063/95, la Sala responsable argumenta en el considerando II lo siguiente: - - - "II. Las manifestaciones de agravio hechas valer por la demandada en los numerales 1 y 2 de sus diversos escritos de dieciséis de junio del año en curso, quince de junio y quince de junio del mismo año, dada la íntima relación que guardan entre sí, se estudian por esta Sala en su conjunto y atendiendo también la coincidencia de expresión literal consignada en los diversos escritos mencionados y por lo que hecho lo anterior, se concluye que esas manifestaciones de agravio son fundadas, pero inoperantes, esto es, son fundadas porque resulta cierto que en forma por demás dogmática, la inferior en grado concluyó el desechamiento de la excepción de improcedencia de la vía hecha valer por las codemandadas, pero improcedentes atento a que tal excepción es notoriamente improcedente, ya que es indudable que en el caso sujeto a estudio son aplicables las reformas al Código de Procedimientos Civiles consignadas en el Decreto de veintiuno de julio de mil novecientos noventa y tres, ya que si bien es cierto, el contrato base de la acción se pactó el primero de junio de mil novecientos ochenta y nueve, no pasa desapercibido que en el mismo se pactó para uso diverso al habitacional, pues del mismo, se advierte que el uso de la localidad arrendada se



SUPREMA C
CORTA DE L
SECRETARÍA GENERAL



pactó para la compraventa de refacción, accesorios,
 aparatos eléctricos y artículos para el hogar, esto
 es, para uso comercial, y lo anterior fue
 expresamente reconocido por la parte demandada,
 tanto al reconocer el contrato base de la acción y
 al dar contestación al hecho tres de la demanda
 instaurada en su contra, y por lo que, en los
 términos de la fracción segunda del artículo segundo
 del mencionado decreto de fecha diecinueve de
 octubre de mil novecientos noventa y tres, resultan
 aplicables las disposiciones procesales aplicadas al
 procedimiento de origen, y sin que resulte óbice
 para lo anterior que el citado contrato se haya
 pactado el primero de junio de mil novecientos
 ochenta y nueve, pues el conflicto de derechos y
 obligaciones derivados de tal contrato y a qué se
 refiere el juicio natural se hizo patente hasta el
 veintiuno de febrero del año en curso, fecha en la
 cual se presentó la demanda que dio origen al
 citado juicio y lo que determina que resulte falso
 que en el presente caso se haya aplicado en forma
 retroactiva la ley procesal aludida en perjuicio de
 la parte demandada en el juicio natural y que
 resulten las violaciones que la misma atribuye al
 juez natural, pues evidentemente no resulta
 aplicable la tesis invocada e identificada bajo el
 rubro: ARRENDAMIENTO. CONTRATO CELEBRADO ANTES DE LA
 ENTRADA EN VIGOR DE LAS REFORMAS EN MATERIA DE
 ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO (LEGISLACION PARA EL
 DISTRITO FEDERAL); dado que la citada tesis se
 refiere a reformas en materia sustantiva y no a
 reformas adjetivas o procesales y también se refiere
 al arrendamiento de bienes inmuebles respecto de los



ORTE DE
 NACION.
 SE ACUERDOS.

PODER

cuales se da aplicación plena de las reformas antes precisadas. Tampoco obsta para la conclusión antes plasmada lo argumentado en el numeral dos de la expresión de agravios que se analiza, dado que al no existir elemento de prueba alguno que resulte apto para concluir la procedencia de la reclamación reconvenzional propuesta por la solución de esta misma fecha, pronunciada por esta Sala en los tocas 2064/95 y 2065/95, para todos los efectos legales a que haya lugar, pues el desechamiento de las pruebas aludidas se dio conforme a derecho. --- Al resultar infundados e inoperantes los agravios hechos valer por la demandada, deberá confirmarse y se confirma en sus términos la resolución recurrida, para todos los efectos legales a que haya lugar. - - - Los argumentos expuestos por la responsable en el considerando II, son violatorios de la garantía de irretroactividad de la ley consagrada en el artículo 14 constitucional. - - - En efecto, en forma substancial la autoridad responsable argumenta que son fundados pero inoperantes los agravios expuestos en contra de la sentencia definitiva, toda vez que en el Juicio de controversias de Arrendamiento Inmobiliario son aplicables las reformas al Código de Procedimientos Civiles consignados en el Decreto de veintiuno de julio de mil novecientos noventa y tres, toda vez que el mismo es para uso diverso del habitacional, ya que aún cuando el contrato es anterior a dichas reformas el juicio se hizo patente hasta el veintiuno de febrero del presente año, por lo que no existe una aplicación retroactiva de la ley, los argumentos anteriores, carecen por completo de toda consistencia legal, toda vez que de acuerdo a





CORTE DE
LA NACION
14 DE AGOSTO

la ejecutoria transcrita en el presente concepto de violación, para dar cumplimiento a la garantía de irretroactividad de la ley establecida en el artículo 14 Constitucional, las reformas posteriores a la fecha de firma de un contrato rigen hacia el futuro, es decir, que sólo son aplicables a los contratos celebrados a partir de su entrada en vigor, de lo que se concluye que contrariamente a los argumentos de la Sala responsable, si en el presente juicio el contrato base de la acción se firmó el día primero de julio de mil novecientos ochenta y nueve, y si las reformas publicadas en Decreto de veintiuno de julio de mil novecientos noventa y tres, no se encontraban vigentes en la fecha de firma del contrato, y, en cambio si establecen posibilidades de defensa sumamente inferiores a las vigentes en la fecha de firma del contrato, es legal y lógico concluir que la aplicación de dichas reformas en el procedimientos seguido en el expediente 242/95, implica una clara aplicación retroactiva de una ley posterior en perjuicio de mi representada y contrariamente a lo argumentado por la Sala responsable, se infringe el artículo 14 Constitucional, lo cual concede a mi mandante pleno derecho al otorgamiento de la amparo y protección de la Justicia Federal. - - - Debe quedar claro que no se encuentra a discusión como erróneamente lo pretende la Sala responsable el hecho de determinar si las reformas consignadas en el Decreto de veintiuno de julio de mil novecientos noventa y tres, en los términos que fueron publicadas pueden regir el procedimiento de controversias de arrendamiento inmobiliario en el expediente 242/95, sino que la litis consistió en determinar si dicho

decreto es violatorio de la garantía de irretroactividad de la ley consagrada en el artículo 14 constitucional. - - En estas condiciones, es evidente que la Sala responsable pronunció una sentencia incongruente con los agravios expuestos, toda vez que argumenta que no existe irretroactividad de la ley en perjuicio de mi representada, cuando es evidente que las reformas de referencia, fueron posteriores a la fecha de firma del contrato, además de que las mismas, contienen un procedimiento sumario, cuyos términos y medios de defensa son inferiores al procedimiento existente en la fecha de firma del documento, base de la acción. De todo lo anterior, se concluye que contrariamente a lo argumentado en la sentencia que se reclama, la aplicación en perjuicio de mi representada de las multitudes reformas, si constituyen una aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de mi representada. - - Carece de trascendencia que en la sentencia que se reclama, se mencione que no existió aplicación retroactiva de la ley, porque aún cuando el contrato se firmó el primero de junio de mil novecientos ochenta y nueve, la demanda se presentó el veintiuno de febrero del año en curso, cuando ya estaban en vigor dichas reformas, pues no se encuentra a discusión si en la fecha de la demanda ya se encontraban en vigor dichas modificaciones al Código de procedimientos Civiles, sino en determinar si dichas reformas, al pretender aplicarse a contratos firmados antes de su entrada en vigor, son violatorias del artículo 14 constitucional, extremo que como hemos visto, ha quedado debidamente acreditado, toda vez que el procedimiento anterior,





ha quedado debidamente acreditado, toda vez que el procedimiento anterior, vigente en la fecha de firma del contrato establecía plazos para demandar, para contestar la demanda, para reconvenir y para ofrecer pruebas, mientras que en las reformas contienen un juicio sumario en el cual se debe incluir las pruebas desde la demanda y desde la contestación, además de limitarse la prueba pericial, lo que ~~no~~ sucede en el procedimiento anterior, todo lo cual implica que las nuevas disposiciones perjudican a mi representada, y al pretender aplicarse a un contrato firmado antes de su entrada en vigor, implican una flagrante violación al artículo 14 constitucional, contrariamente a lo señalado en la sentencia impugnada. - - - Aún cuando la Sala responsable argumenta que la tesis invocada por mi representada y transcrita en la presente demanda, se refiere a reformas en materia substantiva, esta es una apreciación que no queda debidamente probada, ya que en la tesis de referencia nada se dice acerca de que exista una diferenciación, entre la aplicación retroactiva de la ley, cuando se trate de reformas substantivas o adjetivas. - - - De todo lo expuesto se llega a la conclusión, de que al aplicarse en el juicio controversias de arrendamiento, un procedimiento no vigente en la fecha de firma del contrato, las aludidas reformas son violatorias en perjuicio de mi representada del artículo 14 Constitucional."

CUARTO.- El Presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por auto de veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y cinco, registró la demanda con el número DC-5947/95 y

TE DE
NACION
24/10/95

previos los trámites legales, el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, autorizó la sentencia recurrida, la que concluyó con el punto resolutivo siguiente:

"Unico.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Microelectrónica, sociedad anónima, por conducto de su representante Fernando Moreno Corzo, contra el acto que reclama de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consistente en la sentencia de veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y cinco, pronunciada en el toca 2063/95, relativo a la apelación hecha valer en el expediente 242/95, del Juzgado Trigésimo Cuarto del Arrendamiento, que corresponde al juicio seguido en contra de la quejosa y otras por Neftalí Frankel Spanglet, por conducto de su apoderado Salomón Frankel."

QUINTO.- Inconforme con la anterior resolución, Fernando Moreno Corzo, en su carácter de representante legal de la empresa quejosa, interpuso recurso de revisión.



SUPREMA C
JUSTICIA DE D
SECRETARIA GENERAL

La Presidencia de este alto Tribunal, por auto de siete de febrero de mil novecientos noventa y seis, admitió el recurso de revisión que se hizo valer.

El Agente del Ministerio Público Federal, formuló pedimento, solicitando se deseché el recurso de revisión y quede firme la sentencia de la Justicia Federal.



- 15 -

A.D.R. 211/96.

Por auto de primero de marzo de mil novecientos noventa y seis, la citada Presidencia turnó el presente asunto al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, para la elaboración del proyecto de sentencia respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.— Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción II, de la Ley de Amparo, y 11, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo, en la que se hace pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley, como lo es el decreto de once de septiembre de mil novecientos noventa y tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día veintitrés siguiente, que reforma los artículos transitorios del diverso decreto de catorce de julio del año citado, que modificó, adicionó y derogó diversas disposiciones, de entre otros ordenamientos, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

Estas mismas razones en que se sustenta la competencia de este alto Tribunal para conocer del presente recurso de revisión, son válidas para declarar infundado el pedimento del agente del Ministerio Público de la adscripción, de que se deseché el recurso por no




CORTE DE
A NACIÓN
DE AGENCIAS

existir pronunciamiento de constitucionalidad en la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- Las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida en cuanto al pronunciamiento de constitucionalidad del artículo único del decreto de once de septiembre de mil novecientos noventa y tres, son las siguientes:

"SEPTIMO.- En el primer motivo de inconformidad hecho valer por la parte peticionaria de garantías, se dice que se infringe en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 14 constitucional que establece que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. En seguida, transcribe parte de los agravios que expresó en la apelación en contra de la sentencia de fondo, después hace referencia casi textual a las consideraciones que externó la Sala responsable al dar respuesta a sus agravios y finalmente, expone las razones por las que dice que se aplicó de manera retroactiva las reformas al Código de Procedimientos Civiles, consignadas en el Decreto de veintiuno de julio de mil novecientos noventa y tres.- - - La síntesis de las manifestaciones de inconformidad aducidas es la siguiente: Se alega que las razones expuestas en el considerando segundo del fallo reclamado son violatorias de la garantía de irretroactividad de la ley consagrada por el artículo 14 constitucional; porque en términos del criterio de interpretación, cuyo rubro es 'ARRENDAMIENTO. CONTRATO CELEBRADO ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LAS REFORMAS EN



SUPREMA C
JUSTICIA DE I
SALA GENERAL



"MATERIA DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO. (LEGISLACION
 "PARA EL DISTRITO FEDERAL)"; las reformas posteriores
 a la fecha de firma de un contrato rigen hacia el
 futuro, que sólo son aplicables a los contratos
 celebrados a partir de su entrada en vigor, por lo
 que si el contrato base se firmó el primero de julio
 de mil novecientos ochenta y nueve y si las reformas
 publicadas en el Decreto de veintiuno de julio de mil
 novecientos noventa y tres, no se encontraban
 vigentes a la fecha de firma del contrato, se obtiene
 que su aplicación deviene retroactiva en su
 perjuicio; que la litis en la controversia consistió
 en determinar si las reformas consignadas en el
 Decreto de veintiuno de julio de mil novecientos
 noventa y tres, son o no violatorias de la garantía
 de irretroactividad consagrada por el artículo 16
 constitucional; que es evidente que la Sala pronunció
 una sentencia incongruente con los agravios expuestos
 al considerar que no existe retroactividad de la ley,
 en perjuicio de la apelante quejosa; cuando las
 reformas de referencia fueron posteriores a la
 celebración del acuerdo de voluntades básico; que no
 se encuentra a discusión si a la fecha de
 presentación de la demanda las reformas ya habían
 cobrado vigencia, sino determinar si dichas reformas
 podían aplicarse a contratos firmados antes de su
 entrada en vigor; y que la tesis que hace valor nada
 dice acerca de una diferenciación entre la aplicación
 retroactiva de la ley, cuando se trata de normas
 substantivas o adjetivas. - - - El concepto de
 violación en estudio es infundado. - - - En efecto, en
 contra de lo que sostiene la parte quejosa, el evento
 de que el contrato de arrendamiento básico se haya



OFICIO
 DE LA NACION
 DE ABOGADOS

celebrado antes de la entrada en vigor de las reformas al Código de procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de que se trata y que fueron aplicadas en el particular, no implica como injustificadamente lo pretende hacer creer, irretroactividad de la ley en su perjuicio, de acuerdo con los razonamientos siguientes:- - -

Primero, cabe puntualizar que para que una ley se considere retroactiva, se requiere que obre sobre el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo la regulación de leyes anteriores.- - En tratándose de actos jurídicos denominados contratos, el estado jurídico que de ellos emanan, se rige por la normatividad legal inherente, en vigencia en esa época. Se trata de normas substantivas. La idea anterior se explica de manera más clara y precisa con lo siguiente: "CONTRATOS. SUS EFECTOS SE RIGEN POR LA LEY VIGENTE AL MOMENTO DE SU CELEBRACION.- En materia de no retroactividad, la realidad jurídica no corresponde rigurosamente a la realidad material. Si una obligación ha nacido bajo el imperio de la ley antigua, esta obligación subsistirá con los caracteres y las consecuencias que le atribuye esa ley. Así, si en un contrato celebrado con anterioridad a la expedición de una ley, y por la promoción del juicio respectivo y por la realización de hechos jurídicos posteriores, se crea en favor de una persona una situación jurídica concreta, lógico es concluir que los efectos de esos actos realizados antes o después de la vigencia de la ley atacada, deben regirse por la ley antigua, resultando la aplicación de la nueva notoriamente retroactiva y la privación de derechos a que da lugar, violatoria de



SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARIA GENE



"las garantías que otorga el artículo 14
 "constitucional, en su párrafo primero". (Cuarta
 tesis relacionada con la Jurisprudencia 518, visible
 en las páginas novecientos dos y novecientos tres de
 la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Apéndice
 1917-1988). -- -- -- Respecto a la retroactividad en
 materia procesal, este Tribunal Federal, acoge la
 exposición conceptual que se contiene en la tesis
 número I.8°.C.86C, visible en la página trescientos
 dos, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo
 XV, Enero de 1995, Octavo Tribunal Colegiado en
 Materia Civil del Primer Circuito, que dice:
 "RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES. -- Para que
 "una ley se considere retroactiva, se requiere que
 "obre sobre el pasado y que lesione derechos
 "adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, lo
 "que no sucede con las normas procesales. En efecto,
 "se entienden como normas procesales aquellas que
 "instrumentan el procedimiento, son las que
 "establecen las atribuciones, términos y los medios
 "de defensa con que cuentan las partes, para que con
 "la intervención del juez competente obtengan la
 "sanción judicial de sus propios derechos, esos
 "derechos nacen del procedimiento mismo, se agotan en
 "cada etapa procesal en que se van originando y se
 "rigen por la norma vigente que los regula; por lo
 "tanto, si antes de que se actualice una etapa del
 "procedimiento el legislador modifica la tramitación
 "de ésta, suprime un recurso, amplía un término,
 "modifica lo relativo a la valoración de las pruebas,
 "no puede hablarse de aplicación retroactiva de la
 "ley, pues no se priva con la nueva ley de alguna
 "facultad, con la que ya se contaba, por lo que debe



CORT DE

L

341

PODER

"aplicarse esta nueva ley".- - - Basta con lo considerado anteriormente para determinar que la Sala responsable ajustó su proceder conforme a derecho, ya que el evento de que el contrato de arrendamiento básico se hubiera celebrado antes de la entrada en vigor de las reformas de carácter procesal, cuya aplicación en el particular, se tilda de retroactiva, no es motivo suficiente para evidenciar dicho vicio contrario a la garantía relativa consagrada en el artículo 14 de nuestra Carta Magna. Sin que sea óbice a lo anterior la idea expuesta en la tesis que cita la quejosa, cuenta habida de que se estima que el mencionado criterio de interpretación alude a normas substantivas. Y, para obtener contundencia en las consideraciones que sustenta este Tribunal Federal, por razones de nitidez y economía remite al criterio de interpretación emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo intérprete de nuestra Constitución, contenido en la tesis número C/95 (9a.), emitida al resolver el amparo directo en revisión 224/95. Consuelo Rodríguez de Valdivia. 21 de septiembre de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Mariano Azuela Gutiérrez.- Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Aprobada en sesión plenaria del veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de votos, que dice: "INMUEBLES ARRENDADOS PARA UN FIN DIVERSO DEL HABITACIONAL A PARTIR DEL 19 DE OCTUBRE DE 1993. NO ES RETROACTIVO EL DECRETO QUE ORDENA QUE LAS DISPOSICIONES DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL CONTENIDAS EN EL DECRETO DE 14 DE JULIO DE 1993, SE APLICARAN A AQUELLOS.- El Decreto de catorce de julio de mil novecientos





noventa y tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día veintiuno siguiente, en su artículo segundo reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que son de carácter procesal, en tanto regulan algunas cuestiones del procedimiento en los juicios civiles y establecen el relativo a las controversias en materia de arrendamiento inmobiliario. Antes de que entraran en vigor estas disposiciones conforme a las normas transitorias del Decreto mencionado, se reformaron éstas a través del diverso Decreto de once de septiembre de mil novecientos noventa y tres, publicado en el Diario Oficial del día veintitrés siguiente, para establecer que las disposiciones del primer Decreto se aplicarían a partir del diecinueve de octubre del mismo año, cuando se trate, entre otros casos, de inmuebles arrendados a partir de esa fecha, siempre que sean para uso distinto del habitacional. Al disponerse lo anterior, no se viola la garantía de irretroactividad consagrada por el artículo 14 constitucional, dado que el hecho de que los inmuebles se encontraran arrendados no implica que los actos, supuestos y consecuencias contenidos en las normas que regulaban los procedimientos en los juicios ordinarios civiles y en el especial de desahucio, vigentes en la fecha del arrendamiento y que fueron modificados, adicionados o derogados por las nuevas normas, se hubieran realizado; es decir, el acto ejecutado lo es el arrendamiento del inmueble, pero no algún supuesto o consecuencia contenido en las normas que regulaban los procedimientos judiciales relacionados



ORTE DE
A NACIÓN
DE

PODER

con tal arrendamiento, de suerte tal que al establecer el Decreto de once de septiembre de mil novecientos noventa y tres, que se aplicarán las normas reformadas a esos procedimientos no afecta ningún derecho o situación jurídica previamente establecidos, pues el mero hecho del arrendamiento del inmueble no crea el derecho a que las controversias relativas al mismo se tramiten conforme a las disposiciones vigentes en la fecha de tal arrendamiento, ni establece alguna situación dentro o en relación a la tramitación de las controversias de referencia". - - - En esta tesitura es evidente que la Sala responsable actuó en plena congruencia con los agravios expresados por la parte apelante y que ajustó su proceder a la normatividad legal aplicable; entonces, al devenir ineficaces los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, se está en el caso de negar el amparo y protección de la Justicia Federal, solicitado, al no advertirse violación manifiesta alguna a la ley que haya dejado sin defensa a la sociedad impetrante que amerite suplir la deficiencia de la queja en términos de lo previsto por el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo".



SECRETARÍA DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN

TERCERO.- La quejosa y hoy recurrente hizo valer como agravios, los siguientes:

"I.- Se infringe en perjuicio de mi representada el artículo 57, fracción II de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener los fundamentos legales en que se apoyen para sobreseer



en el Juicio, o bien para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado.- - - Lo anterior, toda vez que los fundamentos legales expuestos por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, son improcedentes, por estar en contra de la letra textual del artículo 14 constitucional, como se demostrará a continuación: En efecto, sustancialmente el Tribunal Colegiado de Circuito argumenta que es improcedente el concepto de violación expresado por mi Representada, consistente en que existe una aplicación retroactiva de la ley, porque se aplicó un procedimiento en el juicio de arrendamiento, que no estaba vigente en la fecha de firma del contrato, porque de acuerdo a su opinión la garantía de irretroactividad de la ley no existe en materia procesal, si no únicamente en materia sustantiva, citando como fundamento dos tesis que establecen los argumentos antes expuestos.- - - Los argumentos expresados por el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito y las ejecutorias invocadas como fundamento, son violatorias en perjuicio de mi Representada el artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo en vigor, porque van en contra de lo dispuesto por el artículo 14 constitucional que a la letra dispone: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Como puede observarse, de la simple lectura del artículo 14 constitucional, él mismo dispone que a ninguna ley se dará efecto retroactivo, sin que en ningún momento establezca la diferenciación entre leyes sustantivas o adjetivas, de lo que se concluye que la interpretación del artículo 14 constitucional,

en el sentido de que dicha garantía individual no se aplica a leyes procesales, atenta contra en texto expreso del dispositivo constitucional, que al establecer el enunciado "a ninguna ley", extendió su aplicación a todo tipo de leyes, por lo que la interpretación que efectúa el Tribunal Colegiado de Circuito, así como las que se contienen en las ejecutorias que se transcriben en la resolución recurrida, se encuentran en contra del texto constitucional y por lo mismo, la sentencia impugnada es ilegal y violatoria de lo dispuesto por el artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo. - - - Lo anterior, en atención al principio jurídico que establece que donde la ley no distingue no se debe distinguir, lo cual significa que si el artículo 14 constitucional, nada dice respecto a que la garantía de retroactividad de la ley no opera en materia procesal, es ilegal la diferenciación que efectúa el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil, y en consecuencia procede revocar la sentencia recurrida y pronunciar otra, en la cual se conceda a mi representada el amparo y protección de la Justicia Federal. - - - Abundando al respecto, el grave perjuicio de las reformas en materia procesal causaron a mi representada se desprende del hecho concreto de que el artículo segundo transitorio de las Reformas al Código de Procedimientos Civiles publicadas en el Diario Oficial de la Federación del veintiuno de julio de mil novecientos noventa y tres, establecía en su transitorio segundo, que las disposiciones contenidas en dicho Decreto no serían aplicables a los contratos de arrendamiento celebrados con anterioridad al entrar en vigor del



SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARIA GENERAL



mismo, respetando con ello la garantía de irretroactividad de la ley establecida en el artículo 14 constitucional, no obstante lo cual por múltiples protestas efectuadas en contra de dicho Decreto, en el Diario Oficial de la Federación de veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y tres, se publicó la modificación a los artículos transitorios del Decreto por el que se reformaron el Código Civil y el Código Federal de Procedimientos Civiles, y tomando en consideración que las reformas provocarían multitud de juicios sumarios que lesionarían los derechos de inquilinos, con flagrante violación al artículo 14 constitucional, se publicó el transitorio segundo, mediante el cual se determinó aplicar las reformas a los locales que tuvieran contrato con anterioridad al diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres, cuando fueran para uso distinto del habitacional, mientras que aquellos contratos referidos a casa-habitación, se prorrogó la entrada en vigor de dichas reformas, hasta el diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho, de lo que resulta dos supuestos:-- 1. Que el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiuno de julio de mil novecientos noventa y tres, respetaba la garantía de retroactividad de la ley.-- 2. El Decreto de veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y tres, es violatorio de la garantía de retroactividad de la ley establecida en el artículo 14 constitucional, porque establece la posibilidad de aplicar las reformas en materia procesal a contratos firmados antes de su vigencia.-- 3. Que el Decreto de veintitrés de septiembre de mil novecientos



CORTE
LA N
IL DE

noventa y tres, es violatorio en perjuicio de mi representada de la garantía de igualdad tutelada en el artículo 1° constitucional, porque da un trato distinto a las personas que arriendan un local comercial, a quienes se le aplicarían a partir del diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres, es violatorio en perjuicio de mi representada de la garantía de igualdad tutelada en el artículo 1° constitucional, porque da un trato distinto a las personas que arriendan un local comercial; a quienes se le aplicarían a partir del diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres, las reformas procesales, mientras que aquellas personas que alquilen inmuebles para casa-habitación, se prorrogó la entrada en vigor de las mismas reformas hasta el diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho; es así, mismo violatoria del artículo 13 constitucional, porque las reformas contenidas en el Decreto de veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y tres, establecen una ley privativa, al determinar que las reformas procesales publicadas en veintiuno de julio de mil novecientos noventa y tres, se aplicarían únicamente a los contratos firmados antes del diecinueve de octubre del mismo año, a locales comerciales y hasta el diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho, para casa-habitación, lo cual implica que para un mismo caso, se establecieron condiciones distintas violando con ello el artículo 13 constitucional, que preceptúa que nadie puede ser juzgado por leyes privativas."



SUPREMA C
JUSTICIA DE
SECRETARIA GENERAL



CUARTO.- Este Organo Colegiado estima infundado el primer agravio hecho valer en el que se sostiene que el artículo único del decreto de once de septiembre de mil novecientos noventa y tres, al modificar los artículos transitorios del diverso decreto de catorce de julio del año citado, para establecer que las disposiciones del último decreto citado se aplicarán a partir del diecinueve de octubre del propio año de mil novecientos noventa y tres cuando se trate de inmuebles arrendados en esta fecha, siempre que sean para uso distinto del habitacional, viola la garantía de irretroactividad en perjuicio de los gobernados.

Debe aclararse, en primer término, que el anterior planteamiento de inconstitucionalidad se hizo valer en la demanda de garantías sólo respecto de las reformas, adiciones y derogaciones de los preceptos legales del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal contenidas en el decreto de catorce de julio de mil novecientos noventa y tres, y no en relación a otros ordenamientos legales también reformados y adicionados en dicho decreto, según deriva del concepto de violación relativo transcrito en el resultando segundo de la presente resolución, así como que el estudio de constitucionalidad respecto hecho en la sentencia que se revisa se entiende, por ende, referido exclusivamente al Código especificado, por lo que al mismo se limitará el análisis por parte de este Tribunal Pleno.

Hecha la anterior precisión, resulta conveniente transcribir el artículo segundo del decreto de catorce de julio de mil novecientos noventa y tres,

publicado en el Diario Oficial de la Federación del día veintiuno siguiente, que establece:

"ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 42, 114, fracción VI, 271, cuarto párrafo, 731, 957 a 966, y la denominación del Título Décimo Sexto-Bis, se adicionan los artículos 285 con un último párrafo, y 517 con un último párrafo y se derogan los artículos 489 a 499 y 525, último párrafo del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para quedar como sigue:"

"42.- En las excepciones de litispendencia conexidad y cosa juzgada, la inspección de los autos será también prueba bastante para su procedencia, salvo las relativas a los juicios de arrendamiento inmobiliario, de los que solamente serán admisibles como prueba de las mismas, las copias selladas de la demanda, de la contestación de la demanda o de las cédulas de emplazamiento del juicio primeramente promovido, tratándose de las dos primeras excepciones, y en el caso de la última, se deberá acompañar como prueba, copia certificada de la sentencia y copia del auto que la declaró ejecutoriada."

"Art. 114.-..."

"I a V.-..."

"VI. La sentencia que condene el arrendatario de casa habitación a desocuparla; y"

"VII.- ..."

"Art. 271.- ..."

"Se presumirán confesados los hechos de la demanda que se deje de contestar. Sin embargo, se tendrá por contestada en sentido negativo cuando se



SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARIA GEN



trate de asuntos, que afecten las relaciones familiares, el estado civil de las personas y en los casos en que el emplazamiento se hubiere hecho por edictos."

"Art. 285.- ..."

"Tratándose de juicios de arrendamiento inmobiliario, la prueba pericial sobre cuantificación de daños, reparaciones o mejoras sólo será admisible en el período de ejecución de sentencias, en la que se haya declarado la procedencia de dicha prestación. Asimismo, tratándose de informes que deben rendirse en dichos juicios, los mismos deberán ser recabados por la parte interesada."

"Arts. 489 a 499. (Se derogan)."

"Art. 517.- ..."

"I a III.- ..."

"En el caso en que el arrendatario, en la contestación a la demanda, confiese o se allane a la misma, el juez concederá un plazo de cuatro meses para la desocupación del inmueble."

"Art. 525.- ..."

"... (Se deroga)"

"Art. 731.- Las salas del Tribunal Superior conocerán, en única instancia, de las demandas de responsabilidad civil presentadas contra los jueces de lo Civil, de lo Familiar, del Arrendamiento Inmobiliario y de lo Concursal. Contra las sentencias que aquéllas dicten no se dará recurso alguno."

"TÍTULO DECIMO SEXTO-BIS"

"De las controversias en Materia de Arrendamiento Inmobiliario"

"Art. 957.- A las controversias que versen sobre el arrendamiento inmobiliario les serán



CORTE DE
LA NACIÓN
BAL DE ACUERDOS

aplicables las disposiciones de este título. El juez tendrá las más amplias facultades para decidir en forma pronta y expedita lo que en derecho convenga."

"A las acciones que se intenten contra el fiador que haya otorgado fianza de carácter civil o terceros por controversias derivadas del arrendamiento, se aplicarán las reglas de este título, en lo conducente igualmente, la acción que intente el arrendatario para exigir al arrendador el pago de los daños y perjuicios a que se refieren los artículos 2447 y 2448-J del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, se sujetará a lo dispuesto en este título."



"ART. 958.- Para el ejercicio de cualesquiera de las acciones previstas en este título, el actor deberá exhibir con su demanda el contrato de arrendamiento correspondiente, en el caso de haberse celebrado por escrito."

"En la demanda, contestación, reconvencción y contestación a la reconvencción, las partes deberán ofrecer las pruebas que pretendan rendir durante el juicio, exhibiendo las documentales que tengan en su poder o el escrito sellado mediante el cual hayan solicitado los documentos que no tuvieran en su poder en los términos de los artículos 96 y 97 de este Código."

"Art. 959.- Una vez admitida la demanda con los documentos y copias requeridas, se correrá traslado de ella a la parte demandada, señalando el juez en el auto de admisión, fecha para la celebración de la audiencia de ley, que deberá fijarse entre los 25 y



35 días posteriores a la fecha del auto de admisión de la demanda."

"El demandado deberá dar contestación y formular en su caso reconvencción dentro de los 5 días siguientes a la fecha del emplazamiento. Si hubiera reconvencción se correrá traslado de ésta a la parte actora para que la conteste dentro de los 5 días siguientes a la fecha de notificación del auto que la admita."

"Una vez contestada la demanda y, en su caso, la reconvencción, o transcurridos los plazos para ello, el juez admitirá las pruebas ofrecidas conforme a derecho y rechazará las que no lo sean, fijando la forma de preparación de las mismas, a efecto de que se desahoguen a más tardar en la audiencia de ley."

"Art. 960.- Desde la admisión de las pruebas y hasta la celebración de la audiencia se preparará el desahogo de las pruebas que hayan sido admitidas de acuerdo a lo siguiente:"

"I.- La preparación de las pruebas quedará a cargo de las partes, por lo que deberán presentar a los testigos, peritos y demás pruebas que les hayan sido admitidas y sólo en caso de que demuestren la imposibilidad de preparar directamente el desahogo de algunas de las pruebas que les fueron admitidas, el juez en auxilio del oferente deberá expedir los oficios o citaciones y realizar el nombramiento de los peritos, incluso perito tercero en discordia, poniendo a disposición de la parte oferente los oficios y citaciones respectivas, a efecto de que las partes preparen las pruebas y éstas se desahoguen a más tardar en la audiencia de ley."



CORTE DE
E LA NACIÓN
VERA DE QUERO

"II.- Si llamado un testigo, perito o solicitado un documento que hayan sido admitidos como prueba, no se desahogan éstas a más tardar en la audiencia, se declarará desierta la prueba ofrecida por causa imputable al oferente."

"Art. 961.- La audiencia de ley a que se refieren los artículos anteriores se desarrollará conforme a las siguientes reglas:"

"I.- El juez deberá estar presente durante toda la audiencia y exhortará a las partes a concluir el litigio mediante una amigable composición."

II.- De no lograrse la amigable composición se pasará al desahogo de pruebas admitidas y que se encuentren preparadas, dejando de recibir las que no se encuentren preparadas, las que se declararán desiertas por causa imputable al oferente, por lo que la audiencia no se suspenderá ni diferirá en ningún caso por falta de preparación o desahogo de las pruebas admitidas;"

"III.- Desahogadas las pruebas, las partes alegarán lo que a su derecho convenga y el juez dictará de inmediato la resolución correspondiente."

"Art. 962.- En caso de que dentro del juicio, a que se refiere este título, se demande el pago de rentas atrasadas por 2 o más meses, la parte actora podrá solicitar al juez que la demandada acredite con los recibos de renta correspondientes o escritos de consignación debidamente sellados, que se encuentra al corriente en el pago de las rentas pactadas y no haciéndolo se embargarán bienes de su propiedad suficientes para cubrir las rentas adeudadas."





"Art. 963.- Para los efectos de este título siempre se tendrá como domicilio legal del ejecutado el inmueble motivo del arrendamiento."

"Art. 964.- Los incidentes no suspenderán el procedimiento. Se tramitarán en los términos del artículo 88 de este Código, pero la resolución se pronunciará en la audiencia del juicio conjuntamente con la sentencia definitiva."

"Art. 965. Para la tramitación de apelaciones respecto del juicio a que se refiere este capítulo, se estará a lo siguiente:"

"I.- Las resoluciones y autos que se dicten durante el procedimiento y que sean apelables, una vez interpuesta la apelación, el juez la admitirá si procede y reservará su tramitación para que se realice en su caso, conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Si no se presentara apelación por la misma parte en contra de la sentencia definitiva, se entenderán consentidas las resoluciones y autos que hubieran sido apelados durante dicho procedimiento; y"

"II.- En los procedimientos en materia de arrendamiento no procederá la apelación extraordinaria."

"Art. 966.- En los procedimientos de arrendamiento las apelaciones sólo serán admitidas en el efecto devolutivo."

Los artículos primero y segundo transitorios del decreto de catorce de julio de mil novecientos noventa y cuatro, disponen:

"PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los 90 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación."

"SEGUNDO.- Las disposiciones contenidas en el presente decreto, no serán aplicables a los contratos de arrendamiento celebrados con anterioridad a la entrada en vigor del mismo."

Antes de la entrada en vigor de las disposiciones transcritas, esto es, antes de transcurridos los noventa días previstos en el artículo primero transitorio reproducido, se modificaron los artículos transitorios mediante decreto de once de septiembre de mil novecientos noventa y tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día veintitrés siguiente, para establecer:

"Artículo único.- Se reforman los artículos transitorios del Diverso por el que se reforman el Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia Federal, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 1993, para quedar como sigue:"

"PRIMERO.- Las disposiciones contenidas en el presente decreto entrarán en vigor el 19 de octubre de 1999, salvo lo dispuesto por los transitorios siguientes."

"SEGUNDO.- Las disposiciones del presente decreto se aplicarán a partir del 19 de octubre de 1993, únicamente cuando se trata de inmuebles que:"





"I.- No se encuentren arrendados al 19 de octubre de 1993;"

"II.- Se encuentren arrendados al 19 de octubre de 1993; siempre que sean para uso distinto del habitacional, o"

"III.- Su construcción sea nueva, siempre que el aviso de terminación sea posterior al 19 de octubre de 1993: ..."

El precepto anterior no viola la garantía de irretroactividad en perjuicio de los gobernados consagrada por el artículo 14 constitucional al establecer que las disposiciones del decreto de catorce de julio de mil novecientos noventa y tres, por lo que se refiere al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se aplicarán a partir del diecinueve de octubre de ese año cuando se trate de inmuebles que se encuentren arrendados en esta fecha, siempre que sean para uso distinto del habitacional, en virtud de que, como lo consideró el Tribunal Colegiado, tales disposiciones por mandato legal se aplicarán a partir de su vigencia y, además, la aplicación ordenada por el decreto de once de septiembre de mil novecientos noventa y tres a inmuebles arrendados antes del inicio de esa vigencia no afecta derechos o situaciones jurídicas previamente constituidos.

Efectivamente, las normas del Código de Procedimientos Civiles contenidas en el decreto de catorce de julio de mil novecientos noventa y tres son de carácter procesal en tanto regulan algunas cuestiones del procedimiento en los juicios civiles ordinarios y establecen el relativo a las controversias en materia de



GON.
M. N.
P. D.

arrendamiento inmobiliario; por lo tanto, el que el decreto de once de septiembre de mil novecientos noventa y tres disponga que se apliquen a partir de su vigencia a esos procedimientos aun cuando el arrendamiento del inmueble haya ocurrido con anterioridad a tal vigencia, no afecta la situación jurídica creada con motivo de ese arrendamiento dado que en nada la modifica, pues por virtud del segundo decreto citado se aplicarán a los procedimientos en los juicios y controversias relacionados con el inmueble arrendado, y tampoco afecta algún derecho constituido o derivado del arrendamiento del inmueble dado que este hecho no crea el derecho de que todos los procedimientos legales en las controversias relativas al arrendamiento respectivo se lleven a cabo conforme a las disposiciones vigentes en la fecha del arrendamiento.

STO. P. J. J. J.
SECRETARIA DE JUSTICIA DE LA FEDERACION


No debe perderse de vista que las normas de carácter procesal generalmente no son retroactivas y que para que lo sean es necesario que afecten el supuesto o alguna consecuencia ya producida por una disposición anterior, según lo determinó el Tribunal Pleno al fallar el amparo directo en revisión 2013/88, promovido por Rolando Bosquez Jasso, en sesión de dieciséis de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, por mayoría de diecinueve votos contra uno, y que dio lugar a la tesis publicada en las páginas 646 a 648 de la Primera Parte del Informe de Labores del año de 1989, que establece:

["RETROACTIVIDAD. EL ARTICULO 426, FRACCION I, DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL NO ES RETROACTIVO. Para determinar si una ley procesal cumple con la garantía de irretroactividad



prevista en el artículo 14 constitucional, debe precisarse que tal norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes. El supuesto y la consecuencia, sin embargo, no siempre se generan de modo inmediato; puede ocurrir que su realización se suceda fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, es decir, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, de manera general y en principio, pueden darse las hipótesis siguientes: 1.- Durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos por ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento a que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma substituida. 2.- La norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3.- La norma jurídica contempla un

supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se hayan realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su realización, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan. En este sentido, el artículo 426, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de catorce de enero de mil novecientos ochenta y siete, no es retroactivo y, por tanto, no viola el artículo 14 constitucional, puesto que tal disposición, antes de ser reformada, disponía que causaban ejecutoria por ministerio de ley las sentencias pronunciadas en juicios cuyo interés no rebasara la cantidad de cinco mil pesos, y si bien se alega que la sentencia pronunciada en el juicio de terminación de contrato de arrendamiento era apelable porque la demanda respectiva fue notificada y contestada antes del decreto de reformas, lo cierto es que, aunque la sentencia indicada no fue pronunciada durante la vigencia de la norma anterior sino bajo el imperio de la disposición cuestionada, es claro que tampoco pudo haberse generado la



SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARIA GENERAL



consecuencia específica, prevista por la norma anterior, consistente en la facultad de impugnar la sentencia mediante la interposición del recurso de apelación. Por consiguiente, si la norma reformada y controvertida en el juicio constitucional modificó uno de los actos integrantes del supuesto jurídico previsto por la norma anterior, pero que no fue realizado bajo su vigencia, no viola la garantía de irretroactividad, toda vez que son las disposiciones de la norma posterior las que rigen la realización de dicho supuesto y de las consecuencias jurídicas que a estos supuestos se vinculan.

El mismo criterio sostuvo este Tribunal Pleno al fallar los siguientes amparos directos en revisión: 1761/89, Distribuidora Soel, Sociedad Anónima de Capital Variable, catorce de junio de mil novecientos noventa, mayoría dieciséis votos contra dos; 1722/89, Juan Morales Aguilar, doce de septiembre de mil novecientos noventa, unanimidad de dieciocho votos; 1956/90, Sebastián Pineda Ruiz, catorce de febrero de mil novecientos noventa y uno, mayoría de dieciséis votos contra tres; 1972/91, Mundo Automotriz, Sociedad Anónima, ocho de octubre de mil novecientos noventa y dos, mayoría de catorce votos contra uno; y 1882/91, Panificadora Plateros, Sociedad Anónima, veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y tres, unanimidad de diecinueve votos.

Conforme al criterio transcrito, el que el decreto de once de septiembre de mil novecientos noventa y tres disponga que se aplicarán las normas procesales contenidas en el diverso decreto de catorce de julio del año citado, a los inmuebles arrendados con anterioridad a



COT
LA
BAL

su vigencia, destinados a fin diverso al habitacional, no viola la garantía de irretroactividad dado que el hecho de que los inmuebles se encontraran arrendados no implica que los actos, supuestos y consecuencias contenidos en las normas que regulaban los procedimientos en los juicios ordinarios civiles y en el especial de desahucio, vigentes en la fecha del arrendamiento y que fueron modificados adicionados o derogados por las nuevas normas, se hubiera realizado; es decir, el acto ejecutado lo es el arrendamiento del inmueble, pero no algún supuesto o consecuencia contenido en las normas que regulaban los procedimientos judiciales relacionados con tal arrendamiento, de suerte tal que al ordenar el decreto de once de septiembre de mil novecientos noventa y tres, la aplicación de las normas reformadas a esos procedimientos no afecta ningún derecho o situación jurídica previamente establecidos, pues el mero hecho del arrendamiento del inmueble no crea el derecho a que las controversias relativas al mismo se tramiten conforme a las disposiciones vigentes en la fecha de tal arrendamiento, ni establece alguna situación dentro o en relación a la tramitación de las controversias de referencia.



SUPREMA C
JUSTICIA DE LA
SECRETARIA DE EN

Similar criterio sostuvo este Tribunal Pleno al fallar el amparo directo en revisión 224/95, promovido por Consuelo Rodríguez de Valdivia, en sesión de veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de once votos, y que dió lugar a la tesis publicada en la páginas 89 y 90, del Tomo II, Noviembre de 1995, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:



INMUEBLES ARRENDADOS PARA UN FIN DIVERSO DEL HABITACIONAL A PARTIR DEL 19 DE OCTUBRE DE 1993. NO ES RETROACTIVO EL DECRETO QUE ORDENA QUE LAS DISPOSICIONES DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL CONTENIDAS EN EL DECRETO DE 14 DE JULIO DE 1993, SE APLICARAN A AQUELLOS.- El Decreto de 14 de julio de 1993, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 21 siguiente, en su artículo segundo reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que son de carácter procesal, en tanto regulan algunas cuestiones del procedimiento en los juicios civiles y establecen el relativo a las controversias en materia de arrendamiento inmobiliario. Antes de que entraran en vigor estas disposiciones conforme a las normas transitorias del Decreto mencionado, se reformaron éstas a través del diverso Decreto de 11 de septiembre de 1993, publicado en el Diario Oficial del día 23 siguiente, para establecer que las disposiciones del primer Decreto se aplicarían a partir del 19 de octubre del mismo año, cuando se trate, entre otros casos, de inmuebles arrendados a partir de esa fecha, siempre que sean para uso distinto del habitacional. Al disponerse lo anterior, no se viola la garantía de irretroactividad consagrada por el artículo 14 constitucional, dado que el hecho de que los inmuebles se encontraran arrendados no implica que los actos, supuestos y consecuencias contenidos en las normas que regulaban los procedimientos en los juicios ordinarios civiles y en el especial de desahucio, vigentes en la fecha del arrendamiento y que fueron modificados,

adicionados o derogados por las nuevas normas, se hubieran realizado; es decir, el acto ejecutado lo es el arrendamiento del inmueble, pero no algún supuesto o consecuencia contenido en las normas que regulaban los procedimientos judiciales relacionados con tal arrendamiento, de suerte tal que al establecer el Decreto de once de septiembre de mil novecientos noventa y tres, que se aplicarán las normas reformadas a esos procedimientos no afecta ningún derecho o situación jurídica previamente establecidos, pues el mero hecho del arrendamiento del inmueble no crea el derecho a que las controversias relativas al mismo se tramiten conforme a las disposiciones vigentes en la fecha de tal arrendamiento, ni establece alguna situación dentro en relación a la tramitación de las controversias de referencia".

QUINTO.- Este Tribunal Pleno considera inoperante el planteamiento hecho valer en el diverso agravio, consistente en la violación al artículo 13 constitucional con la reforma a los artículos transitorios del decreto de catorce de julio de mil novecientos noventa y tres, ya que basta la simple lectura de los conceptos de violación y de las consideraciones de la sentencia del tribunal colegiado, para advertir que tal violación no se hizo valer en los primeros y, por ende, tampoco fue materia de las segundas. Por lo tanto, lo procedentes es declarar inatendible tal motivo de inconformidad.

De conformidad con todo lo manifestado y dado que los agravios resultaron infundados e inoperantes,



SUPREMO

TRIBUNAL

DE JUSTICIA

FOLIO 10

DE 11

DE 12

DE 13

DE 14

DE 15

DE 16

DE 17

DE 18

DE 19

DE 20

DE 21

DE 22

DE 23

DE 24

DE 25

DE 26

DE 27

DE 28

DE 29

DE 30

DE 31

DE 32

DE 33

DE 34

DE 35

DE 36

DE 37

DE 38

DE 39

DE 40

DE 41

DE 42



procede en la materia de la revisión, confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.- En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Microelectrónica, sociedad anónima, por conducto de su representante legal, Fernando Moreno Corzo, contra el acto que reclama de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, precisado en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Pleno, por unanimidad de diez votos de los señores Ministros: Aguirre Anguiano, Azuela Güitrón, Díaz Romero, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Román Palacios, Sánchez Cordero, Silva Meza y Presidente en Funciones Castro y Castro.- No asistió el señor Ministro Presidente José Vicente Aguinaco Alemán, por estar atendiendo otras actividades inherentes a su cargo.

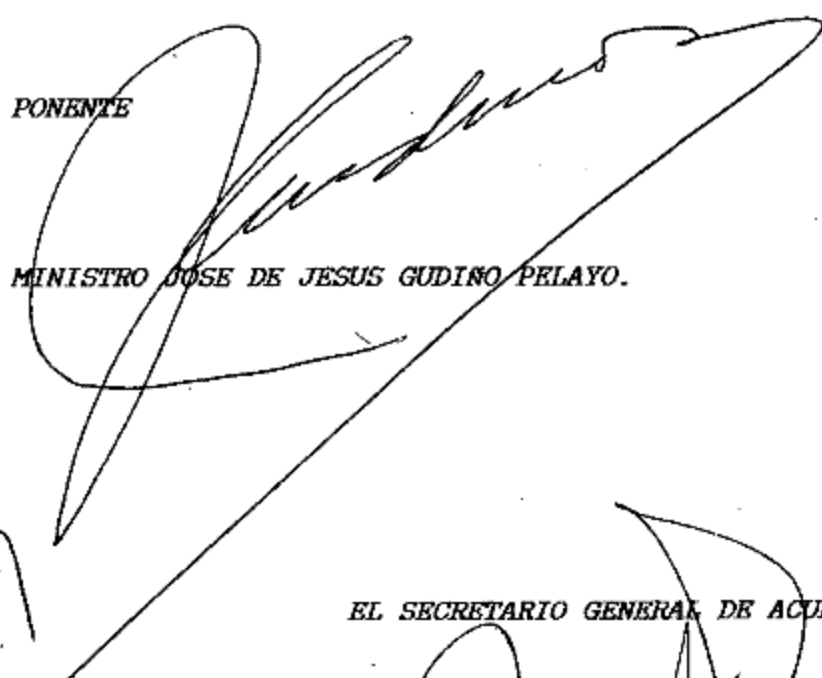
Firman el Presidente en Funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Ministro Ponente, con el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.

PRESIDENTE EN FUNCIONES



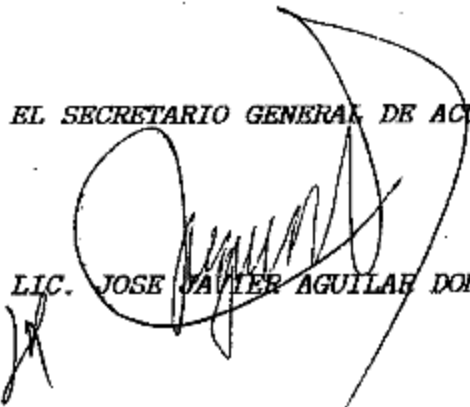
MINISTRO JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.

PONENTE



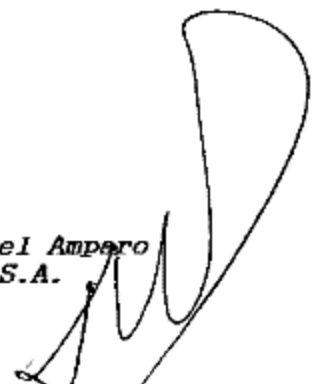
MINISTRO JOSE DE JESUS GUDINO PELAYO.

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS



LIC. JOSE JAVIER AGUILAR DOMINGUEZ.

Esta hoja corresponde a la sentencia dictada en el Amparo en Revisión 211/96.- Quejoso: Microelectrónica, S.A.



RECIBIDO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
PARA NOTIFICACION EN 20 MAR. 1997

En 24 MAR. 1997 y por medio de lista se notificó la resolución anterior a las partes y al Ministerio Público Federal. Conste.

